

mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*P. Ogasón.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ortiz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis N. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero 6 de 1871.
—*Agustín Peralta*.—Oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por los CC. Angel M. Domínguez, Leon Covarrubias, Jesus M. Guerra, José G. Terán y Lic. Francisco Villaseñor, contra el decreto número 14, expedido por la H. Legislatura de Querétaro en 4 de Julio de 1870, en el que se declararon insubsistentes las elecciones de Diputados propietarios y suplentes, verificadas en el Distrito del centro, por creer violadas las garantías individuales que otorgan los artículos 14, 20, 21, la fracción segunda del artículo 35, el 40 y 109 de la Constitución general de la República.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que es muy grave el punto sometido á la decision de vd.; porque con ocasion de él, se encuentra en la necesidad de fijar el sentido de una de las mas importantes atribuciones que el código fundamental le concede, cual es: la de mantener á salvo las garantías individuales, de toda ley ó acto de autoridad que las vulnere.

En el caso presente hay nada menos que saber, si la mayoría de la Legislatura del Estado de Querétaro, al declarar nulas las elecciones de la minoría, que le es adversa, obró dentro del círculo de sus facultades; y en caso negativo, si los Tribunales de la federacion deben reparar este acto ilegal.

No cabe la menor duda respecto de la injusticia del decreto de la Legislatura, y

el Promotor confieza con pena cuanto sobre este particular han probado los quejosos; con tanto mas motivo, cuanto que el mencionado cuerpo ha desdoblado el enviar copia de los documentos que pudieran servir de base para su defensa en esta parte.

Comprende el Promotor, que no es fácil presenciar con indiferencia una arbitrariedad, cualquiera que sea el poder de donde emane, pero tambien reflexiona que el interes que inspiran los derechos conculcados debe desaparecer delante de consideraciones mas elevadas que afectan al mantenimiento de los principios constitucionales que se refieren á la soberanía ó independencia de los Estados. Por lo que cree imposible amparar á la minoría electa contra el decreto de la mayoría constituida en Legislatura, sin lastimar esos principios, abrogándose la prerogativa que esta posee legalmente para desidir las dudas que ocurran sobre las elecciones de sus miembros. (Constitucion del Estado de Querétaro art. 40.)

Siguiendo el uso muy comun entre nosotros, de acudir á las doctrinas de los publicistas que han estudiado la Constitucion Norte Americana, el promotor está convencido de que ya desde el siglo pasado estaban preocupados los estadistas de esa nacion, por actos semejantes al de la Legislatura, de Querétaro sin que por eso les hayan puesto el remedio conveniente.

En el número 51 del "Federalista" se leen las siguientes espresiones del presidente James Madison. "En las Repúblicas, dice, es sumamente importante, no solo defender la sociedad contra la opresion de los que la gobiernan, sino tambien resguardar una parte de la sociedad contra la injusticia de la otra. La justicia es el blanco á que debe visar cualquier gobierno, y el objeto que se proponen los hombres recurriéndose. Los pueblos han hecho y harán siempre esfuerzos hácia este intento, hasta que hayan logrado alcanzarlo ó perdido su libertad.

Si existiese una sociedad en la cual el partido mas poderoso se hallase en estado

de reunir fácilmente sus fuerzas, y de oprimir al mas endeble, se podria considerar que reina la anarquía en semejante sociedad tan bien como en el estado de naturaleza, donde el individuo mas débil no tiene ningun resguardo contra la violencia del mas fuerte; y del mismo modo que en el estado de naturaleza, los inconvenientes de una suerte incierta y precaria deciden á los mas fuertes á someterse á un gobierno que proteja tanto á los débiles como á sí mismos, así tambien en un gobierno anárquico idénticos motivos conducirán poco á poco á los partidos mas poderosos á desear un gobierno que pueda proteger igualmente á todos los partidos, al fuerte y al endeble. Si el estado de Roda-Islandia estuviese separado de la Confederacion y entregado á un gobierno popular ejercido soberanamente en estrechos límites, no cabe duda que la tiranía de las mayorías hará tan muerto el ejercicio de los otros, que al cabo no se reclame una autoridad del todo independiente del pueblo; y las mismas facciones, que la hayan hecho necesario, se apresurarán á apelar de ella."

Jefferson decia tambien: "La potestad ejecutiva de nuestro gobierno no es la sola, y tal vez tampoco el principal objeto de mi solicitud. La tiranía de los legisladores es actualmente y será todavía por espacio de muchos años, el peligro mas tremendo; y la del poder ejecutivo vendrá luego, pero en un periodo mas remoto." (Carta de Jefferson á Madison en 15 de Marzo de 1789.)

Alejo de Tocqueville, uno de los juriscultos europeos que mas han comprendido las instituciones Norte-Americanas, se expresa en estos términos: "Aunque considero impía y detestable la máxima de que en materia de gobierno la mayoría de un pueblo tiene derecho para hacerlo todo, sin embargo, coloco en las disposiciones de ella el origen de todos los poderes." "Así, pues, soy de parecer que siempre se ha de colocar en alguna parte un poder social superior á todos los demas, sin que por eso deje de creer que peligra la libertad cuando este poder

no encuentra delante de sí ningun tropiezo que pueda atajar su marcha, y darle lugar para amaynarse el mismo." (De la Democracia en la América del Norte tom. 2º cap. 7º.)

El mismo autor dice: "Si alguna vez se pierde la libertad en América, será preciso atribuirlo á la Omnipotencia de la mayoría, la cual habrá desesperado á las minorías, y forzándolas á apelar á la fuerza material, en cuyo caso aparecerá la anarquía, llegando empero como consecuencia del despotismo." (Lugar citado.) Y que cuando así se expresa el autor, se refiere á los Estados, lo aclara en la nota que sigue: "A mi vez es escusado advertir al lector que aquí, como en los demas del capítulo, hablo, no del gobierno federal, sino de los gobiernos particulares de cada Estado que la mayoría dirige despóticamente."

Mas si estas doctrinas no parecen bastante esplicitas para probar la última proposicion asentada, no se pondrá en duda que lo es la siguiente del mismo espositor: En América la Legislatura de cada Estado no tiene delante de sí ninguna autoridad capaz de enfrenarla, pues nada hay que pueda detenerla en su marcha, ni regalías ni franquicias locales, ni influjo personal, ni aun siquiera la autoridad de la razon. Ella representa la mayoría, que se dice único órgano de esta última, y por consiguiente no tiene otros límites en su accion sino su propia voluntad. Al lado y alcance suyo se encuentra el representante del Poder Ejecutivo, que al arrimo de la fuerza material debe obligar á los descontentos á la obediencia." (De la Democracia en la América del Norte, cap. 5º párrafo último parte 1ª)

El que suscribe está muy lejos de adoptar tan desconsoladoras teorías que solo aduce para explicar las generalidades que tomadas de la misma fuente pretenda hacer valer la contraria en su alegato.

Si en vez de buscar en las instituciones de la República vecina la manera de resolver esta importante cuestion, tan solo se

atiende á los principios de nuestra Constitucion, el ánimo queda persuadido sin dificultad, de que no es posible conceder el amparo pedido por la minoría de la Legislatura contra el decreto de la mayoría.

Tres son los casos en que los Tribunales de la federacion conceden el recurso de amparo, á saber: 1º por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales: 2º por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados: 3º por leyes ó actos de la autoridad de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal. (Arts. 101 y 102 de la Constitucion.) Actualmente se ha introducido el recurso conforme al primer caso, creyendo los quejosos que por el decreto referido se han violado en sus personas las garantías individuales.

Estas garantías se reducen á la seguridad personal, á la propiedad real y la libertad individual: derechos inalienables y sagrados del hombre en su estado natural, que es el de sociedad, y para cuya proteccion se han establecido los gobiernos. Por este motivo su conservacion es anterior á la soberanía, de los Estados y se han puesto bajo del especial cuidado del Poder judicial de la federacion, que debe preservarlos de todo ataque que venga de la mano de la autoridad. Que tal ha sido el espíritu de los Legisladores de 1857, lo demuestran las siguientes palabras, que se leen en el manifiesto del Congreso constituyente de la Nacion: "Persuadido el Congreso de que la sociedad para ser justa, sin lo que no puede ser duradera, debe respetar los derechos concedidos al hombre por su Criador, convencido de que las mas brillantes y deslumbradoras teorías políticas son torpe engaño, amarga irrisión, cuando no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza de libertad civil, ha definido clara y precisamente las garantías individuales, poniéndolas á cubierto de todo ataque arbitrario."

La acta de derechos que vá al frente de la Constitucion, es un homenaje tributado en vuestro nombre, por vuestros legislado-

res, á los derechos imprescriptibles de la humanidad.

Como se vé, las garantías individuales son los mismos derechos del hombre, cuyo ejercicio constituye el pleno goce de la libertad civil. No habiendo sido violada ninguna de estas garantías consignadas en la seccion 1ª tit. 1º de la Constitucion, no puede tener lugar el recurso de amparo intentado.

El poder ser votado para un cargo de eleccion popular, es prerogativa del ciudadano mexicano y no derecho del hombre. (tit. 1º fraccion 4ª seccion 4ª, fraccion 2ª art. 35 de la Constitucion federal.) El poder ser votado para un cargo de eleccion popular del Estado de Querétaro es prerogativa del ciudadano queretano (art. 15 de la Constitucion del Estado de Querétaro.) En el supuesto de haberse violado derechos por el decreto de la Legislatura, en que se declararon nulas las elecciones del Distrito del centro de Querétaro, no pueden ser otros que los propios del ciudadano queretano, cuya proteccion no corresponde al Juzgado de Distrito.

Los quejosos consideran violada la garantía que otorga el artículo 21 de la Constitucion, y por consecuencia la especificada en la fraccion 5ª del art. 20. El Promotor cree, que no se les ha impuesto la pena que refieren, supuesto que aun están hábiles para ser electos otra vez para cualquier cargo de nombramiento popular, y expeditos en el ejercicio de sus derechos de ciudadanos. Tampoco se les ha depuesto del cargo de diputados porque aun no han llegado á serlo. No es la eleccion la única que se requiere para ser diputado, sino la eleccion hecha *rite et recte* calificada y aprobada por la mayoría del Congreso erigido en colegio electoral. Y que las dudas que se suscitan sobre las elecciones de los miembros de la Legislatura, deben ser resueltas por ella misma, es innegable; (art. 4º de la Constitucion del Estado de Querétaro).

Definidas esmeradamente en la Constitucion las atribuciones de los poderes fede-

rales, se declaró que cuanto no se hallare comprendido en la definición se incluye en las atribuciones de los Estados. No estando concedida por la Constitución á los funcionarios federales la facultad de calificar las elecciones de los miembros de las legislaturas, se entiende reservada á los Estados (artículo 117 de la Constitución federal). No puede por lo mismo considerarse anticonstitucional el art. 40 de la ley fundamental de Querétaro, sino antes bien, derivado de la Constitución general y de la soberanía del Estado. Así, pues, al haber hecho uso la actual Legislatura de la atribución que le concede dicho artículo 40, ha ejercitado una facultad que le es propia.

El promotor está persuadido de la necesidad de poner fin á escándalos, que dan origen á la animosidad entre los CC. de la Union, que no pueden sobrellevar con filosófico estoicismo, abusos cometidos en nombre de la soberanía de los Estados. Parece que el espíritu funesto que los ha creado, toma formas imprevistas cada día contra las cuales nada puede la Constitución. Como el gobierno general realmente es el único que no tiene predilecciones locales, y que puede mostrarse verdaderamente imparcial entre los miembros desunidos de un Estado; y como por otra parte, es natural que los ciudadanos de cada Estado gocen de las prerogativas é inmunidades que respectivamente gozan en su territorio los demás, parece consecuente que la justicia de la Union mantenga invariable esta igualdad de privilegios, sirviendo de supremo poder regulador. Mas si esto prueba que es preciso dar una ley que haga cesar las divisiones entre los poderes de los Estados, no establece la jurisdicción del Juzgado en el asunto actual.

Si vd. con la rectitud y prevision que forman la parte principal de su carácter, termina esta trascendental cuestion, evitará un choque inminente entre la soberanía del Estado y los Poderes de la Union; pero si en vez de limitarse al ejercicio de sus

facultades se deja llevar del desco y propension de extenderlas mas allá de los términos fijado por la Constitución y las leyes, su sentencia servirá para apresurar ese desenlace, tan temido por los que solo anhelan el reinado de la paz.

Querétaro, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del ciudadano Juez de Distrito.

Querétaro, Diciembre veintitres de mil ochocientos setenta.

Visto este juicio de amparo promovido individualmente por los CC. A. Domínguez, Leon Covarrubias, Jesus M. Guerra, José G. Terán y Lic. Francisco Villaseñor, contra el decreto número 14 de 4 de Julio del presente año expedido por la honorable Legislatura de este Estado, en que se declararon insubsistentes las elecciones de diputados propietarios y suplentes verificadas en el Distrito del Centro, con el cual creen violadas las garantías individuales reconocidas en los artículos 14, 20, 21, la fracción segunda del artículo 35, el 40 y 109 de la Constitución general de la República; vistos los escritos de queja y documentos que acompañan: el auto de 15 de Noviembre en que se mandó acumular los escritos y pedido el informe respectivo al Ejecutivo del Estado, conforme al artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869: el informe que sin justificación rindió éste: el pedimento del Promotor fiscal de 24 de Noviembre, que juzgó improcedente el recurso por las razones que en él aduce: el auto de 25 de Noviembre en que con fundamento del artículo 10 de la ley de 20 de Enero ya citada, se mandó abrir el juicio á prueba: el de 28 del propio mes de Noviembre que con total arreglo al artículo 12 de la misma ley, se concedió el término de diez días para obtener de los ciudadanos secretarios del Congreso de la Union el certificado solici-

tado por los quejosos: la prueba testimonial rendida: los periódicos oficiales que á petición de las partes remitió el Ejecutivo del Estado: las comunicaciones dirigidas por este Juzgado en 28 del próximo pasado Noviembre y 3 del presente á la honorable Legislatura, solicitando á petición del actor y el promotor, copia certificada por los ciudadanos secretarios, del expediente formado al emitir el decreto número 14 que es el acto que motiva el reclamo: la comunicación de 6 del presente de la honorable Legislatura, que acordó no ser de darse á este Juzgado federal las constancias pedidas por las partes: la conformidad de estas en no insistir en su pedido, por las razones que expresan en sus respectivas comunicaciones: las certificaciones presentadas por el actor de las actas del colegio electoral y la expedida por el Congreso de la Unión: el auto en virtud del que se puso de manifiesto el expediente á fin de que las partes alegasen, y los respectivos alegatos presentados en consecuencia: la citación para sentencia y todo lo demás que verse convino. Considerando: primero, que este Juzgado al hacer la acumulación de los escritos de queja, procedió así por ser una misma la acción, una misma la cosa que pretenden y á fin de expeditar su secuela (Carley. del Judic., tít. 2º, disput. 2ª Salg. Labyr., Part. 1ª, cap. 4º) sin entenderse por esto el que el Juzgado admitió el recurso colectivo sino individualmente, y con total arreglo al artículo 102 de la Constitución federal. Considerando: segundo, que la petición que por conducto de este Juzgado hicieron las partes á la honorable Legislatura, está fundada en el derecho que concede el artículo 12 de la ley de 20 de Enero de 1869, para que toda autoridad ó funcionario proporcione con la oportunidad necesaria al Promotor, al actor, su abogado y patrono, las constancias que pídieren para presentarlas como prueba en el juicio, de cuya obligación no podía excusarse eximida la Legislatura, siendo una ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitu-

ción, y ser el Código fundamental de la República y las leyes dadas por el Congreso de la Unión que emanan de ella, la ley suprema de la Unión (art. 126 de la Constitución). Considerando: tercero, que la negativa de la honorable Legislatura no puede perjudicar á las partes; que el Juzgado solo puede conocer y sentenciar por las pruebas y constancias aducidas en el juicio sometido á su exámen. Considerando: cuarto, que en los periódicos, órganos oficiales del Estado, no aparecen las actas de la Legislatura formadas para acumulación de las elecciones: que las credenciales presentadas por los quejosos, cuya certificación corre en autos de la foja 65 á la 69; y las declaraciones á fojas 142 vuelta, 143 vuelta, 152 y 163 vuelta, rendidas por los ciudadanos diputados suplentes, manifiestan que al expedir la Legislatura el decreto número 14, no tuvo en consideración las credenciales de los ciudadanos diputados propietarios y suplentes del Distrito del Centro, conforme lo previenen el párrafo 2º artículos 7 y 8 del Reglamento del Congreso del Estado; que si bien los Estados son libres y soberanos en lo que toca á su régimen interior, esto debe entenderse siempre en los términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir á las estipulaciones del pacto federal, (artículos 40 y 41 de la Constitución). Considerando: quinto, que el artículo 35 de la Constitución entre las prerogativas del ciudadano, le concede en la fracción 2ª la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, el impedir á un ciudadano esta prerogativa sin sujetarse á las prescripciones constitucionales del Estado respectivo y leyes que de ella emanan, es privarle de esa garantía concedida por la Constitución general: que la forma de gobierno á que deben sujetarse los Estados en su régimen interior, es el representativo popular, (artículo 109 de la Constitución,) lo que vendría á ser ilusorio y el sufragio popular no sería respetado si un

ciudadano electo para un cargo popular no tuviese la garantía de que su elección sería calificada en el modo y forma prevenido por la Constitución y leyes respectivas. Teniendo en consideración, por último: que los quejosos al intentar este recurso, lo han hecho como simples ciudadanos creyendo violadas en sus personas algunas de las garantías que la Constitución federal les concede. Por todo lo expuesto y con fundamento de la fracción 1ª del artículo 101, del 102, de la fracción 2ª del 35, del artículo 40, 41, 109 y 126 de la Constitución federal, y artículos 1, 2, 13, 23 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, debía fallar y fallo:

Primero: La justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Angel M. Dominguez, Leon Covarrubias, Jesus M. Guerra, José G. Terán y Lic. Francisco Villaseñor contra el decreto número 14 de 4 de Julio del presente año, que declaró insubsistentes las elecciones de diputados propietarios y suplentes del Distrito del Centro, para solo el efecto de que se observe lo prevenido en la Constitución y leyes respectivas.

Segundo: Remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión, sacándose previamente dos copias de esta sentencia, que se publicarán en el diario oficial del Gobierno Supremo y en el del Estado. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el ciudadano Juez de Distrito del Estado de Querétaro, Lic. Víctor de la Peña y Barragan, por ante mí de lo que doy fé.—(Firmado.)—*V. de la Peña y Barragan.*—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de justicia.

México, Enero veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Querétaro por los CC. Angel M. Dominguez, Leon Covarrubias, Jesus M. Guerra, José G. Terán y Lic. Francisco Villaseñor, con-

tra el decreto número 14 expedido por la Legislatura del mismo Estado el 4 de Julio del año próximo pasado, cuyo decreto declaró insubsistentes las elecciones de diputados verificadas en el Distrito del Centro, atacando segun los quejosos las garantías que reconocen los artículos 14, 20, 21, y 35 en su fracción 2ª, 40 y 109 de la Constitución general; y considerando: que la Legislatura del Estado de Querétaro al expedir el decreto citado, obró dentro de la órbita de sus facultades sin atacar alguna garantía individual; con fundamento de lo expuesto y de lo que dispone el artículo 101 de la propia Constitución, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del mismo Estado, y en consecuencia, que la justicia de la Unión no ampara ni protege á los ciudadanos quejosos contra el mencionado decreto.

Devuélvanse al Juzgado de Distrito sus actuaciones con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero cuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Agustín Peralta*, oficial mayor.